

4. Negociaciones de paz en Asia y el Pacífico

- En Asia y el Pacífico hubo 10 procesos de negociación, el 23% del total de casos en el mundo.
- En Filipinas, tras un paréntesis de seis años, el Gobierno y el NDF firmaron un comunicado conjunto en noviembre en el que se comprometen a intentar resolver el conflicto armado a través del diálogo.
- El Gobierno filipino entabló negociaciones con las dos principales facciones del MNLF en relación a la plena implementación del Acuerdo de Paz de 1996, la participación del MNLF en el gobierno de la región de Bangsamoro o la reintegración de combatientes del grupo.
- En el sur de Tailandia, el Gobierno y el BRN firmaron una hoja de ruta, el BRN aceptó que otros grupos armados participen las negociaciones, Malasia designó a un nuevo facilitador y el Gobierno nombró a un nuevo panel negociador.
- El Gobierno de Myanmar y el grupo armado MNDA alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en diciembre que no logró dar fin a la escalada más grave de violencia en el país desde el golpe de Estado de 2021.
- Corea del Norte y Corea del Sur cerraron la puerta a cualquier diálogo sobre la reunificación de ambos países.

En este capítulo se analizan los principales procesos y negociaciones de paz en Asia y el Pacífico durante 2023, tanto las características y tendencias generales de las negociaciones como la evolución de cada uno de los contextos en el continente a lo largo del año, incluyendo referencias a la agenda de género, paz y seguridad. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países de Asia que albergaron negociaciones de paz durante 2023.

Tabla 4.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en Asia y el Pacífico en 2023

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Corea, RPD – Corea, Rep. de	Corea del Norte, Corea del Sur	--
Corea, RPD – EEUU	Corea del Norte, EEUU	--
Filipinas (MILF)	Gobierno, MILF, Gobierno interino de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán	Malasia, Third Party Monitoring Team, Independent Decommissioning Body
Filipinas (MNLF)	Gobierno, MNLF (facciones lideradas por Nur Misuari y Muslimin Sema)	--
Filipinas (NDF)	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)	Noruega
India (Assam)	Gobierno, ULFA-PTF, ULFA-I; AANLA, AANLA (FG), BCF, BCF (BT), STF, ACMA, ACMA (FG) y APA	--
India (Nagalandia)	Gobierno indio, NSCN-IM, NNPG: GPRN/NSCN (Kitovi Zhimomi), NNC, FGN, NSCN(R), NPGN (Non-Accord) y NNC/GDRN/NA, ZUF	--
Myanmar	Gobierno; grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF, NMSP y LDU; grupos armados no adheridos al NCA: UWSF, NDAA, SSPP/SSA-N, KNPP, NSCN-K, KIA, AA, TNLA, MNDA	China, ASEAN
Papúa Nueva Guinea (Bougainville)	Gobierno, Gobierno Autónomo de Bougainville	ONU
Tailandia (sur)	Gobierno, BRN	Malasia

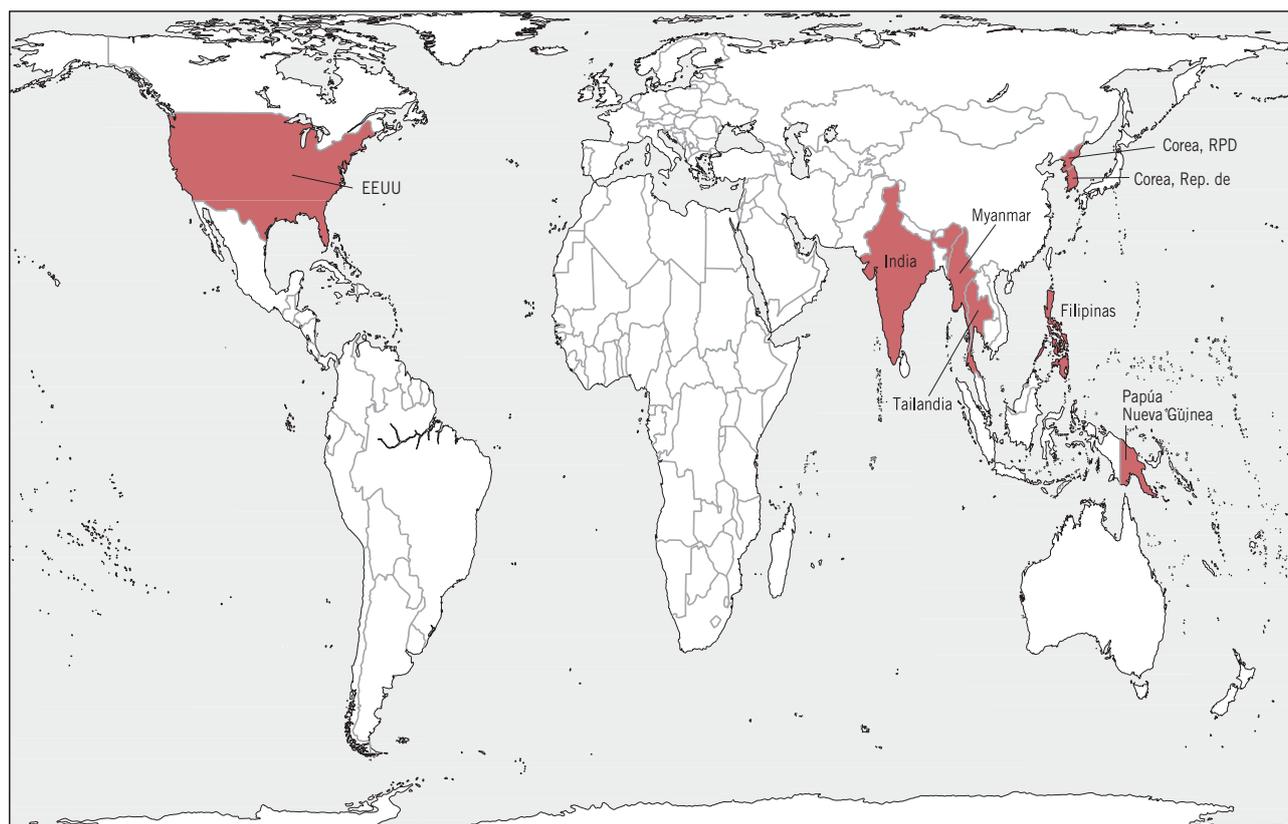
Las negociaciones de paz marcadas en negrita son descritas en el capítulo.
 -- No existen o no hay constancia pública de la existencia de terceras partes.

4.1 Negociaciones de paz en 2023: tendencias regionales

Durante el año 2023 tuvieron lugar **10 negociaciones de paz en Asia y el Pacífico**, la misma cifra que en los

últimos años. En relación al año anterior, hubo un caso que dejó de ser considerado (Pakistán) y otro que se

Mapa 4.1. Negociaciones de paz en 2023 en Asia y el Pacífico



■ Países con procesos y negociaciones de paz en Asia y el Pacífico en el año 2023

incorporó al listado de casos analizados (Filipinas, en relación al MRLF). El proceso de paz entre el Gobierno pakistaní y el grupo armado talibán TTP se rompió después de que en noviembre de 2022 el grupo armado pusiera fin al acuerdo de alto el fuego que se había alcanzado en los meses previos. Tras la ruptura del alto el fuego se produjo un incremento de la violencia y una intensificación del conflicto armado. En cuanto a Filipinas, el Gobierno reanudó las conversaciones con las dos principales facciones del MRLF en relación a la plena implementación del Acuerdo de Paz de 1996, la participación del grupo en el gobierno de la región de Bangsamoro o la reintegración de combatientes. La mitad de las negociaciones en Asia y el Pacífico se desarrollaron en el Sudeste Asiático – Filipinas (MILF, MRLF y NDF), Myanmar y Tailandia (Sur)–, dos en Asia Meridional –India (Assam y Nagalandia)–, dos en Asia Oriental (RPD Corea- Rep. De Corea y RPD Corea-EEUU) y una en la región del Pacífico –Papúa Nueva Guinea (Bouganville). Alrededor de un tercio de las negociaciones estaban vinculadas a la resolución de conflictos armados activos, aunque con diferentes grados de violencia y enfrentamientos entre las partes –Filipinas (NDF), Myanmar, y Tailandia (sur)–, mientras que en el resto de casos se trataba de escenarios de tensión de carácter sociopolítico, tanto de carácter interno como interestatal –RPD Corea- Rep. De Corea y RPD Corea-EEUU, India (Assam y Nagalandia) y Papúa Nueva Guinea (Bouganville) o bien de conflictos armados en los que se firmaron acuerdos de paz – Filipinas (MILF, MRLF).

Respecto a los **actores que protagonizaron los diferentes procesos de diálogo**, cabe destacar la participación de los respectivos Gobiernos en todas ellas. En algunos casos, las negociaciones fueron directamente con grupos armados –el NSCN-IM en Nagalandia; ULFA-PTF en Assam, ambos casos en India; el BRN en Tailandia o el MNDAA, entre otros grupos, en Myanmar—o bien con organizaciones políticas en representación grupos insurgentes, como el caso de Filipinas, en el que Manila negocia con el National Democratic Front (NDF) en representación del Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el NPA. En la misma línea, en el caso de Myanmar, el Gobierno también mantuvo la interlocución con agrupaciones formales o informales de organizaciones armadas, como la Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA, el TNLA y el AA– o el Acuerdo de Alto el Fuego Nacional del año 2015. En otras ocasiones, las negociaciones fueron entre Gobiernos y grupos armados que, aunque no plenamente desarmados ni desmovilizados, ya no mantienen una actividad armada regular y sostenida, como el caso del MILF y el MRLF en Filipinas, el ULFA-PTF en el estado indio de Assam o los grupos armados nagas en Nagalandia, también en la India.

En otros contextos, fueron únicamente gobiernos los que protagonizaron las negociaciones, ya sean de tipo interestatal o de carácter interno o doméstico. En cuanto a las primeras, cabe destacar las negociaciones interestatales entre los Gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur así como entre Corea del Norte y EEUU.

En otros contextos las interlocuciones tuvieron lugar entre Gobiernos centrales y regionales, como fue el caso de las negociaciones entre el Gobierno de Filipinas y el Gobierno regional de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán y el de las negociaciones entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno regional de Bougainville. En los casos de Nagalandia y Assam, aunque fue el Gobierno central quien protagonizó las negociaciones con diversos grupos armados, los Gobiernos estatales también se implicaron en alguna medida en una solución negociada al conflicto. Por tanto, en comparación con otras regiones, en Asia y el Pacífico los actores gubernamentales de entidades subestatales tuvieron un papel relevante en varios de los procesos negociadores.

En cuanto a las **cuestiones principales** sobre las que pivotaban las negociaciones en Asia y el Pacífico, cabe destacar principalmente los temas relativos a la autonomía, autodeterminación, independencia, encaje territorial o reconocimiento identitario de diferentes minorías nacionales, como los casos de India (Assam y Nagalandia), Filipinas (MILF, MNLF), Myanmar, Papúa Nueva Guinea (Bougainville) y Tailandia (Sur). Otra de las cuestiones presente en varios procesos de negociación fue el desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes. En Filipinas, el MILF y el Gobierno supervisaron la tercera fase del proceso de desarme y desmovilización de ex combatientes del MILF, que se inició en 2015 y que hasta el momento ha incluido a 26.145 de los 40.000 ex combatientes incluidos en el acuerdo de paz de 2014. Del mismo modo, como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno filipino en el acuerdo de paz de 1996 con el MNLF, Manila impulsó programas de reinserción para combatientes del MNLF en varias regiones de Mindanao. En Assam, como consecuencia del acuerdo firmado en septiembre de 2022 entre el Gobierno indio y ocho grupos armados adivasis, 1.182 integrantes de cinco de estos grupos (AANLA, ACMA, APA, BCF y STF) hicieron entrega de sus armas en julio y recibieron una prestación económica a cambio de su desarme. Finalmente, cabe destacar que en varios de los procesos de negociación en Asia y el Pacífico durante el año 2023 cobraron importancia determinadas cuestiones procedimentales y más vinculadas al diseño del proceso que a cuestiones sustantivas de la negociación. En Filipinas, por ejemplo, el Gobierno y el NDF reafirmaron su compromiso de solventar el conflicto armado activo desde los años 60 a través del diálogo, pero no quedó claro si se trataba de una reanudación del diálogo que se interrumpió en 2017 –lo cual implicaría reafirmar la hoja de ruta y los acuerdos firmados hasta el momento—o bien el inicio de un nuevo proceso de negociación, desvinculado de los marcos y compromisos de las últimas tres décadas. En el sur de Tailandia también hubo novedades

En cuanto a las cuestiones principales sobre las que pivotaban las negociaciones en Asia y el Pacífico, cabe destacar principalmente los temas relativos a la autonomía, autodeterminación, independencia, encaje territorial o reconocimiento identitario de diferentes minorías nacionales

significativas en cuanto a aspectos procedimentales. El nuevo Gobierno que sucedió a la junta militar que ha gobernado el país en los últimos años designó un nuevo panel negociador, mientras que el Gobierno de Malasia, que ejerce las funciones de mediación del diálogo, designó a un nuevo facilitador. A su vez, el BRN mostró su disposición a incluir en el proceso a nuevos actores armados. En Papúa Nueva Guinea, el gobierno central y el gobierno de la región de Bougainville centraron sus conversaciones en el procedimiento –mayoría simple o cualificada, por ejemplo– para decidir acerca del estatus político y la posible independencia de Bougainville. En Filipinas, el Gobierno hizo pública su intención de trabajar para que el desarrollo de un nuevo régimen autonómico en Mindanao (Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán) posibilite la convergencia de los procesos de negociación y acuerdos de paz entre el MNLF y el MILF, que suscribieron sendos acuerdos de paz con el Gobierno en 1996 y 2014 respectivamente.

En cuanto al rol de las **terceras partes**, un 50% de los procesos de paz en Asia y el Pacífico no contaron con la facilitación de terceras partes, siendo tal porcentaje superior al de la mayor parte de regiones en el mundo. Concretamente, los casos en los que la interlocución entre las partes fue directa y sin facilitación externa fueron Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte y EEUU, los estados indios de Assam y Nagalandia y Filipinas y el MNLF. Además, las negociaciones que sí contactaron con apoyo externo se caracterizaron también por una presencia más reducida de terceras partes en diferentes roles, ya que en gran parte de procesos de paz únicamente había uno o dos actores facilitando el diálogo. Así sucedió en las negociaciones entre Filipinas y el NDF, que tuvieron lugar con el apoyo de Noruega; en el caso de las negociaciones entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y la Región Autónoma de Bougainville, con el acompañamiento de Naciones Unidas; en las negociaciones en Tailandia con el grupo armado de oposición BRN, con la facilitación de Malasia; o Myanmar, donde China trató de impulsar las negociaciones entre el Gobierno y diferentes grupos armados étnicos y ASEAN mantuvo contactos con la junta militar para resolver la crisis política que atraviesa el país desde el golpe de Estado de 2021. El único caso en el que el acompañamiento por parte de terceras partes fue más complejo y plural fue el de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno filipino y el MILF en 2014. Además de la interlocución que mantienen los paneles del Gobierno y el MILF con la facilitación de Malasia, el proceso de implementación del acuerdo de paz contó con el acompañamiento del Third Party Monitoring Team –encargado de supervisar la implementación de los acuerdos firmados entre el MILF y el Gobierno–, o el International Decommissioning Body –conformado por Türkiye, Noruega, Brunei y personal

local de Filipinas, para supervisar la desmovilización de 40.000 ex combatientes del MILF. En consonancia con la escasa participación de terceras partes en la facilitación o acompañamiento del diálogo en Asia, el papel de las **organizaciones internacionales o regionales** también fue testimonial, y muy inferior al de otros continentes. Cabe destacar la facilitación de diálogo por parte de Naciones Unidas entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno autónomo de Bougainville para determinar el estatus político de Bougainville, o el rol de ASEAN promoviendo una salida a la crisis política en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021.

Respecto a la **evolución** de las negociaciones de paz en el continente asiático, en algunos casos se produjeron **avances** importantes. En Filipinas, por ejemplo, el Gobierno agilizó la concesión de una amnistía a distintas organizaciones insurgentes en el país; certificó la finalización de la tercera fase del proceso de desmovilización de excombatientes del MILF (que incluye 26.000 de los 40.000 ex combatientes previstos entre todas las fases); reanudó las conversaciones con las dos principales facciones del MNLF en relación a la plena implementación del Acuerdo de Paz de 1996, la participación del grupo en el gobierno de la región de Bangsamoro o la reintegración de combatientes; e hizo pública su intención de armonizar los procesos de negociación del MILF y el MNLF. Sin embargo, el hecho con mayor repercusión política en el país fue el comunicado conjunto entre el Gobierno y el NDF en el que anunciaron su compromiso de intentar resolver el conflicto armado a través del diálogo, tras un paréntesis de seis años de parálisis en el proceso de negociación. En Tailandia, también hubo algunos avances importantes en el proceso de diálogo en el sur del país, como la designación de un nuevo facilitador por parte de Malasia, el nombramiento de un nuevo panel negociador por parte del nuevo Gobierno de Tailandia surgido de las elecciones celebradas en mayo, la aceptación por parte del BRN de que otros grupos armados participen en el proceso de negociación y, especialmente, la firma de una hoja de ruta compartida entre ambas partes que deberá ser implementada en 2023 y 2024. En Myanmar, en diciembre se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado MNDAA, facilitado por China, que tuvo lugar después de una escalada del conflicto armado sin precedentes en el norte del estado Shan. No obstante, el acuerdo no logró dar fin a la escalada. En el estado indio de Assam, se registraron avances importantes en el diálogo entre el Gobierno y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado ULFA (ULFA-PTF), hasta el punto de que diversos medios de comunicación señalaron que se esperaba la firma de un acuerdo de paz antes de las próximas elecciones a la Cámara Baja que tendrán lugar entre abril y mayo de 2024. Además, el

Un 50% de los procesos de paz en Asia no contaron con la facilitación de terceras partes, siendo tal porcentaje superior al de la mayor parte de regiones en el mundo

Gobierno indio anunció una iniciativa de acercamiento a familiares de integrantes de la facción del ULFA contraria a las negociaciones y encabezada por Paresh Baruah.

Sin embargo, en algunos casos también hubo **estancamiento**, parálisis e incluso retrocesos. En el estado indio de Nagalandia, por ejemplo, las negociaciones de paz entre el Gobierno indio y el grupo armado naga NSCN-IM continuaron estancadas y sin avances, principalmente por el desacuerdo en la cuestión de una bandera y Constitución propias para Nagalandia. En cuanto al proceso de diálogo entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno de Bougainville, en varios momentos del año se produjeron importantes desencuentros entre ambas partes acerca de cuestiones procedimentales y de fondo del proceso –en especial sobre el formato y la mayoría necesaria en el Parlamento nacional en la votación sobre la independencia de Bougainville–, y las autoridades de Bougainville declararon no tener ninguna confianza en el Gobierno central y acusaron a Port Moresby de obstaculizar el avance del proceso. En Filipinas, a pesar del comunicado conjunto entre el Gobierno y el NDF acerca de la reanudación del diálogo tras un paréntesis de seis años, a finales de diciembre Manila expresó su profundo malestar con un comunicado emitido por el Partido Comunista en el que anunciaba el inicio del llamado Tercer Movimiento de Rectificación, declaraba la primacía de la lucha armada para lograr transformaciones y afirmaba que las conversaciones de paz eran un campo de batalla adicional para el avance de sus objetivos. En cuanto a la situación en la península coreana, no se registraron avances en las negociaciones entre EEUU y Corea del Norte acerca del arsenal nuclear de Pyongyang y las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte se deterioraron notablemente durante el año, hasta el punto de que ambos países suspendieron el acuerdo del año 2018, en el que, entre otras cuestiones, ambos países se comprometían a mejorar las relaciones bilaterales y a negociar activamente en favor de la reunificación.

En lo que respecta a la aplicación de la **agenda género, paz y seguridad** y la participación de las mujeres en los procesos de paz, se constataron pocos avances significativos. Cabe destacar la aprobación en Filipinas del plan de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad el período entre 2023 y 2033 o la elección por primera vez de dos mujeres como representantes en la asamblea legislativa del estado de Nagalandia. Aunque las mujeres siguieron siendo excluidas de la mayor parte de negociaciones, cabe destacar que en el proceso entre el Gobierno de Filipinas y el NDF, el panel negociador del grupo está encabezado por una mujer (Juliet de Lima) y la facilitación del proceso por parte del Gobierno de Noruega recae en Kristina Lie Revheim.

4.2 Análisis de casos

4.2.1 Asia

Asia Meridional

India (Assam)	
Actores negociadores	Gobierno, ULFA-PTF, ULFA-I; AANLA, AANLA (FG), BCF, BCF (BT), STF, ACMA, ACMA (FG) y APA
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:

El estado indio de Assam ha sido foco de varios conflictos y tensiones entre el Gobierno indio y diferentes grupos armados que han reivindicado la independencia Assam o un mayor reconocimiento de los derechos políticos y culturales de diferentes minorías étnicas. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se produjeron varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasaron. En 2005 se inició un proceso de paz con el grupo armado United Liberation Front of Asom (ULFA) que se interrumpió en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Desde 2011 se produjo una reducción significativa de la violencia en el estado y numerosos grupos armados entregaron las armas o iniciaron conversaciones con el Gobierno, entre ellos la principal organización insurgente del estado, ULFA, que sufrió una escisión como consecuencia del diálogo por parte de una facción contraria a las conversaciones de paz.

Durante el año avanzaron las negociaciones entre el Gobierno indio, el Gobierno del estado de Assam y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado ULFA (ULFA-PTF), encabezada por su presidente, Arabinda Rajkhowa, y su secretario general, Anup Chetia, quien ha estado a cargo de las conversaciones. Los contactos entre esta facción y los Gobiernos se iniciaron en 2011. A lo largo de 2023 se llevaron a cabo discusiones sobre un borrador de acuerdo al que, según el grupo armado, se incorporaron diversas peticiones presentadas por la insurgencia. Las conversaciones se llevaron a cabo con el interlocutor gubernamental, A K Mishra. Este presentó en el mes de enero un borrador de acuerdo que fue discutido por un comité de trabajo y el Comité Central del ULFA-PTF. Si bien no trascendieron detalles del contenido del acuerdo en discusión, uno de los temas abordados en las negociaciones fueron las garantías de seguridad para los combatientes que se desmovilizasen. En agosto se llevó a cabo un encuentro de dos días entre representantes del Gobierno indio –específicamente del ministerio de Interior y de la agencia de inteligencia india– y una delegación del ULFA-PTF, conformada por Rajkhowa, Anup Chetia, y otros dos dirigentes del grupo armado, Raju Baruah y Sasha Choudhury. La agenda de las negociaciones estuvo conformada por un documento de 12 puntos

elaborado por el grupo armado, que contenía temas como la salvaguarda de los derechos políticos de la población indígena de Assam, así como cuestiones relativas al control de los recursos económicos. Además, se incluía la demanda de reconocimiento de seis comunidades como “tribus registradas” (*scheduled tribes*): moran, muttock, tai-ahom, koch-rajbongshi, sootea y tea tribes, lo que les conferiría un estatus de protección específico. Este reconocimiento conllevaría que la mitad de la población de Assam pasaría a tener un reconocimiento tribal. Finalmente, el 29 de diciembre se alcanzó un acuerdo tripartito entre el Gobierno indio, el Gobierno del estado de Assam y el ULFA-PTF por el que el grupo armado abandonaba definitivamente la violencia, a cambio de medidas relativas a los derechos de las comunidades indígenas, reservas de territorio y un paquete financiero para el grupo armado.. Por otra parte, el Gobierno indio anunció una iniciativa de acercamiento a familiares de integrantes de la facción del ULFA contraria a las negociaciones y encabezada por Pares Baruah. Este acercamiento, denominado “Del conflicto a la colaboración: na iniciativa de creación de confianza para un futuro pacífico”, incluía visitas a instalaciones policiales y militares. La facción de Baruah se negó a iniciar conversaciones, señalando la negativa del Gobierno indio a incluir en la agenda de las negociaciones la principal demanda del grupo, la soberanía de Assam. Esta facción del ULFA sería el único grupo armado insurgente en Assam que no estaría incluido en ningún proceso negociador. Por otra parte, **como consecuencia del acuerdo firmado en septiembre de 2022 entre el Gobierno indio y ocho grupos armados adivasi, 1.182 integrantes de cinco de estos grupos (AANLA, ACMA, APA, BCF y STF) hicieron entrega de sus armas en julio.** Los antiguos combatientes recibieron una prestación económica a cambio de su desarme. Además, se conformó el Consejo Adivasi de Bienestar y Desarrollo, también incluido en el acuerdo e integrado por 16 miembros y con un mandato de trabajar para preservar la identidad y cultura adivasi, así como el bienestar de la población indígena. A la entrega de las armas asistió el ministro jefe de Assam, Himanta Biswa Sarma. Las negociaciones entre estos grupos y el Gobierno se habían iniciado en el año 2012, con un acuerdo de suspensión de operaciones en 2016 y varias rondas de negociaciones hasta fructificar en el acuerdo de 2022.

India (Nagalandia)	
Actores negociadores	Gobierno indio, NSCN-IM, NNPG: GPRN/ NSCN (Kitovi Zhimomi), NNC, FGN, NSCN(R), NPGN (Non-Accord) y NNC/ GDRN/NA, ZUF
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Acuerdo marco (2015)

Síntesis:

El estado indio de Nagalandia ha vivido una situación de conflicto armado y crisis sociopolítica desde los años cincuenta, como consecuencia de la aspiración no satisfecha

de independencia y creación de un Estado soberano de gran parte de la población naga. Desde la década de los sesenta se han producido diferentes intentos de negociación, pero no fue hasta el año 1997 que se logró un acuerdo de alto el fuego con el grupo NSCN-IM, uno de los principales actores del conflicto. A pesar de que el acuerdo se ha mantenido vigente hasta la actualidad, las negociaciones no han logrado avances significativos en los temas centrales, aunque en el año 2012 el proceso de paz experimentó un impulso gracias a un mayor involucramiento del Gobierno naga y parlamentarios del estado. En paralelo a las negociaciones con el NSCN-IM, en el año 2001, el Gobierno alcanzó otro acuerdo de alto el fuego con la organización insurgente NSCN-K, sin que tampoco estas negociaciones hayan avanzado de manera significativa. En 2015, el Gobierno y el NSCN-IM alcanzaron un preacuerdo marco de paz, considerado un preámbulo para la resolución final del conflicto. Sin embargo, ese mismo año se rompió el acuerdo de alto el fuego con el NSCN-K, reiniciándose enfrentamientos de carácter violento.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno indio y el grupo armado naga NSCN-IM continuaron estancadas y sin avances. Como en años anteriores, el bloqueo estuvo provocado por el desacuerdo en la cuestión de una bandera y Constitución propias para Nagalandia, aspectos sobre los que no se ha logrado progresar, a pesar de que el diálogo ha continuado abierto entre ambas partes. Durante el año se produjeron varias rondas de conversaciones y encuentros informales entre el grupo armado y representantes del Gobierno indio en Delhi –en abril, agosto y noviembre–, centradas en las cuestiones de la bandera y la Constitución, sin que se lograran avances que permitieran superar el bloqueo. Tras la última ronda de negociaciones entre ambas partes, que tuvo lugar en noviembre en Delhi, el grupo armado declaró que la no aceptación de estas demandas por el Gobierno indio era un incumplimiento del acuerdo marco alcanzado en 2015. Diferentes organizaciones de la sociedad civil naga expresaron su descontento por el bloqueo en el proceso.

Género, paz y seguridad

Por primera vez en Nagalandia, dos mujeres fueron elegidas como representantes en la asamblea legislativa del estado, después de que se lograra implementar la reserva del 33% para las candidaturas femeninas. En el pasado, la oposición a esta reserva había dado lugar a protestas de carácter violento. La asamblea legislativa naga juega un papel relevante en las negociaciones de paz y sus representantes se han involucrado activamente en el proceso.

Asia Oriental

Corea, RPD-Corea, Rep. de	
Actores negociadores	Corea del Norte, Corea del Sur
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Declaración de Panmunjom (abril de 2018)

Síntesis:

A pesar de que los momentos álgidos del diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur han sido las cumbres presidenciales que se han celebrado en el siglo XXI (2000, 2007 y 2018), desde los años setenta ha habido algunos intentos de acercar posiciones y de avanzar en la senda de la reunificación y la cooperación. Así, en 1972 ambos países firmaron la Declaración Conjunta de Corea del Norte y del Sur, en la que se esbozaban algunas medidas para la reunificación o la reducción de la carrera armamentística, entre otras cuestiones. A finales de 1991 ambos países firmaron el Acuerdo sobre Reconciliación, No-agresión, Intercambios y Cooperación y, pocas semanas más tarde, la Declaración Conjunta sobre la Desnuclearización de la Península Coreana. El primero, que se logró tras cinco rondas de negociación iniciadas en septiembre de 1990 entre los primeros ministros de ambos países, fue considerado por buena parte de la comunidad internacional como un acuerdo histórico y un punto de inflexión en la relación entre ambos países por cuanto incluía compromisos de no agresión mutua, respeto de los sistemas políticos y económicos de cada país, resolución pacífica de conflictos, cooperación económica e impulso de medidas para la reunificación de los dos países. Sin embargo, las medidas comprendidas en dicho acuerdo no se implementaron plenamente, en parte por las tensiones que generó el programa armamentístico de Corea del Norte. En 1994 el ex presidente estadounidense Jimmy Carter ejerció sus buenos oficios entre los líderes de ambos países para contener la crisis que generaron los avances en dicho programa y la decisión de Pyongyang de no permitir las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica o de abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ya en el siglo XXI, al amparo de la política de acercamiento a Corea del Norte –denominada Política del Sol– impulsada por Kim Dae-jun y continuada por su sucesor, Roh Moon-hyun, Pyongyang acogió en 2000 y 2007 las dos primeras cumbres presidenciales desde el fin de la Guerra de Corea, en las que ambos países nuevamente se comprometieron a incrementar su cooperación para avanzar hacia una mayor estabilidad y una eventual reunificación de la península coreana.

En paralelo al incremento de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, durante el 2023 no solamente no se registraron negociaciones ni reuniones entre ambos gobiernos, sino que las relaciones diplomáticas y el diálogo sobre una eventual reunificación u otras cuestiones quedaron en suspenso. De hecho, en su discurso de fin de año, el líder de Corea del Norte, **Kim Jong-un, declaró que las relaciones intercoreanas se habían convertido en una relación entre dos países hostiles y beligerantes, por lo que su Gobierno ya no buscaría ni aceptaría ningún tipo de diálogo acerca de la reunificación y la reconciliación.** En la misma línea, Kim Jong-un declaró que no tiene ningún sentido mantener conversaciones con un país, Corea del Sur, que trata a su país vecino como su principal enemigo y que solamente busca el colapso del país y lo que él tildó de “unificación por absorción”. En el mismo discurso, el líder norcoreano declaró que las Fuerzas Armadas aniquilarían completamente a EEUU y Corea del Sur si Corea del Norte era provocada. Pocos días más tarde de este discurso, Kim Jong-un también pidió a la Asamblea legislativa reescribir la constitución del Norte para eliminar la idea de un estado compartido entre dos países divididos por la guerra, para definir a Corea del Sur como el “principal enemigo” de Corea del

Norte y para especificar que Corea del Norte buscará “ocupar, subyugar y reclamar” Corea del Sur como parte del territorio de Corea del Norte si estalla otra guerra en la península coreana. Del mismo modo, Kim Jong-un ordenó la eliminación de los símbolos de la reconciliación intercoreana –a modo de ejemplo, exigió derribar un monumento en honor a la búsqueda de la reunificación en Pyongyang–, así como la abolición de conceptos como ‘reunificación’, ‘reconciliación’ y ‘compatriotas’ de la historia nacional. En la misma línea, Corea del Norte también cortó las vías ferroviarias transfronterizas y abolió las agencias gubernamentales de gestión de las relaciones y el diálogo con Corea del Sur, como el Comité para la Reunificación Pacífica del País –el principal organismo de los asuntos intercoreanos desde su creación en 1961–, o la Oficina Nacional de Cooperación Económica y la Administración de Turismo Internacional, que se encargaban de gestionar proyectos económicos y turísticos conjuntos, como un parque industrial conjunto en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la reducción de los contactos y las relaciones entre ambos países y señaló que el diálogo y el compromiso diplomático seguían siendo el único camino posible para una paz sostenible y una desnuclearización completa y verificable en la península de Corea.

Previamente a tales discursos y acciones, a finales de noviembre, **Corea del Norte había suspendido un acuerdo entre ambos países firmado 2018** por Kim Jong-un y en entonces presidente surcoreano Moon Jae-in, en un momento de aproximación de posiciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que coincidió con la celebración de varias cumbres entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. Cabe señalar que el día anterior a la decisión de Pyongyang de poner fin a tal acuerdo, el Gobierno surcoreano también lo había suspendido parcialmente y había reanudado la vigilancia aérea a lo largo de la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), en respuesta a la puesta en órbita por parte de Corea del Norte de su primer satélite espía militar. Tal acuerdo de 2018 –oficialmente, la Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península de Corea– era considerado la máxima expresión del acercamiento de posiciones entre ambos países y de las perspectivas de alcanzar la reunificación y desnuclearización de la península coreana a través del diálogo. El acuerdo instaba a ambos países a incrementar la cooperación y el diálogo para lograr tales fines, y también abogaba por la implementación inmediata de medidas concretas, como el establecimiento una oficina de enlace conjunta con representantes residentes de ambas partes en la región de Gaeseong para facilitar el diálogo entre autoridades; la gestión conjunta de cuestiones humanitarias y el programa de reunión de familias separadas por la guerra (con la facilitación de la Cruz Roja); la participación conjunta en eventos deportivos internacionales como los Juegos Asiáticos de 2018; o la conexión y modernización de los ferrocarriles y las

carreteras fronterizas. Corea del Sur y Corea del Norte también acordaron transformar la zona desmilitarizada (DMZ) en una zona de paz --cesando por completo desde el 2 de mayo de 2018 todos los actos hostiles en tierra, aire y mar–; diseñar un plan para convertir las áreas alrededor de la Línea Límite Norte en el Mar Occidental –frontera de facto y disputada entre ambos países– en una zona marítima de paz con el fin de evitar enfrentamientos militares accidentales y garantizar actividades pesqueras seguras; o celebrar de manera periódica reuniones militares al más alto nivel, incluyendo a los ministros de Defensa de ambos países. Finalmente, el acuerdo de 2018 que ambos países suspendieron en noviembre también reafirmaba el Acuerdo de No Agresión –que excluye el uso de la fuerza en cualquier forma entre sí–; instaba a llevar a cabo el desarme de manera gradual, a medida que se aliviara la tensión militar y se lograran avances sustanciales en el fomento de la confianza militar. Además, con motivo del 65º aniversario del Armisticio, Corea del Sur y Corea del Norte acordaron llevar a cabo activamente reuniones trilaterales con EEUU, o cuadrilaterales con China, con miras a declarar el fin de la guerra y establecer un régimen de paz permanente en la península coreana. En este sentido, Corea del Sur y del Norte confirmaron el objetivo común de lograr una desnuclearización completa y una península de Corea libre de armas nucleares, y Seúl reconoció y valoró explícitamente las medidas en favor de la desnuclearización que estaba llevando a cabo Corea del Norte.

Sudeste asiático

Filipinas (MILF)	
Actores negociadores	Gobierno, MILF, Gobierno de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán
Terceras partes	Malasia, Third Party Monitoring Team, Independent Decommissioning Body
Acuerdos relevantes	Acuerdo para el cese general de hostilidades (1997), Acuerdo sobre paz entre el Gobierno y el MILF (2001), Cese mutuo de hostilidades (2003), Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (2012), Acuerdo Global sobre Bangsamoro (2014), Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (2018)

Síntesis:

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF, grupo escindido del MNLF, se iniciaron en 1997, pocos meses después de que el Ejecutivo de Fidel Ramos hubiera firmado un acuerdo de paz con el MNLF. Desde entonces, el proceso negociador se ha visto interrumpido en tres ocasiones (en los años 2000, 2003 y 2008) por el estallido de violencia de alta intensidad. A pesar de ello, durante las más de 30 rondas de negociación que se han producido desde finales de los años noventa se han alcanzado algunos acuerdos en materia de seguridad y desarrollo, así como un acuerdo de cese de hostilidades que en términos generales ha sido respetado. En octubre de 2012 ambas partes firmaron el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro y en marzo de 2014 el

Acuerdo Global sobre Bangsamoro, que prevé la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán por una nueva entidad política con mayor cobertura territorial y competencias de autogobierno más amplias. Desde el año 2014, el proceso de paz estuvo centrado en la redacción y aprobación por parte del Congreso de la Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, que incorpora los principales contenidos de los dos mencionados acuerdos de paz y que fue aprobada por el Congreso en 2018. Tras su ratificación en plebiscito a principios de 2019, el proceso de paz ha pivotado sobre la implementación de los acuerdos de paz, el desarrollo institucional de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (gobernada de manera interina por el líder del MILF) y el desarme del MILF.

Durante el año el Gobierno, el MILF y el Gobierno de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, encabezada por el líder del MILF, siguieron manteniendo contacto regular para continuar con la implementación del acuerdo de paz de 2014. **Cabe destacar especialmente la reunión de principios de julio entre los Paneles de Implementación de la Paz de ambas partes, la primera desde que Ferdinand Marcos asumió el cargo como presidente de Filipinas en junio de 2022.** En dicha reunión ambas partes reiteraron su compromiso con la implementación del acuerdo y discutieron el estado actual y los siguientes pasos en varios aspectos del mismo, como el redespiegue de las Fuerzas Armadas en Mindanao, la transformación de los campamentos del MILF en áreas productivas, los paquetes socio-económicos para ex combatientes del MILF o la movilización de recursos económicos en el ámbito nacional e internacional para acelerar la implementación del acuerdo. Además, el Gobierno y el MILF discutieron acerca de la muerte de siete miembros del MILF en Maguindanao del Sur a mediados de junio en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambas partes celebraron la diligencia con la que el Gobierno había iniciado una investigación al respecto, aunque el MILF denunció que se trató de una operación no comunicada ni coordinada previamente y que, por tanto, se trataba de una grave violación del acuerdo de cese de hostilidades y del Grupo Conjunto de Acción Ad Hoc.

A mediados de agosto, **se completó la tercera fase del proceso de desarme y desmovilización de ex combatientes del MILF, que se inició en 2015 y que hasta el momento ha afectado a 26.145 personas.** Se prevé que la última fase involucre a otros 14.000 miembros del MILF. El Gobierno, el MILF y el Organismo de Supervisión de la Desmovilización, liderado por el embajador turco Mehmet Suat Akgün, valoraron muy positivamente la finalización de la tercera fase, aunque pocos días antes el MILF había advertido que la continuación del proceso de desarme de combatientes dependía en buena medida de los avances que se produjeran en otros aspectos del acuerdo, como el desmantelamiento de grupos armados privados, transformación económica y productiva de los seis campamentos del MILF, justicia transicional o amnistía. Respecto de esta última cuestión, a finales

de noviembre se hizo pública una proclamación presidencial que concedía una amnistía a todos aquellos combatientes del MILF que hubieran cometido delitos relacionados con sus convicciones políticas. El MILF, que valoró positivamente tal medida, deberá canalizar las solicitudes a través de la Comisión Nacional de Amnistía, el organismo encargado de decidir acerca de la concesión de los beneficios de la amnistía.

Género, paz y seguridad

A mediados de diciembre, la Oficina del Consejero Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad, la Comisión Filipina de Mujeres, ONU Mujeres y varias organizaciones nacionales e internacionales de promoción de los derechos de las mujeres anunciaron públicamente el Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el período entre 2023 y 2033. Dicho plan es el cuarto desde que se aprobó el primero en el año 2010, en cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que entre otras cuestiones insta a promover una mayor participación de las mujeres en ámbitos como las negociaciones de paz, la prevención y resolución de conflictos, construcción de paz o mantenimiento de la paz. Varias de las autoridades que intervinieron en el acto de lanzamiento del plan destacaron que Filipinas había sido uno de los países pioneros en Asia en tener un instrumento de este tipo y en abordar la agenda de mujeres, paz y seguridad. La OPRARU destacó que el Plan Nacional también abordaba realidades emergentes como la acción climática y la seguridad cibernética y marítima, y llamó a las organizaciones de la sociedad civil a apoyar su implementación.

Filipinas (MNLF)	
Actores negociadores	Gobierno, MNLF (facciones lideradas por Nur Misuari y Muslimin Sema)
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Trípoli (1976), Acuerdo de paz final (1996)

Síntesis:

Tras un lustro de hostilidades armadas de alta intensidad entre el Gobierno y el MNLF, ambas partes firmaron un acuerdo de paz en 1976 en Trípoli bajo los auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), que poco antes había reconocido al MNLF como el representante legítimo del pueblo moro. Sin embargo, la implementación unilateral de dicho acuerdo por parte de la dictadura de Ferdinand Marcos provocó el reinicio del conflicto armado. Tras la caída de Marcos y la recuperación de la democracia en 1986, se reanudaron las conversaciones de paz y en 1996 se logró un nuevo acuerdo de paz para la plena implementación del acuerdo de Trípoli de 1976. Sin embargo, tanto el MNLF como la OCI consideraron que aspectos sustanciales del nuevo acuerdo de paz no habían sido implementados, de modo que desde el año 2007 se inició un proceso tripartito de revisión del mismo. A pesar de los avances que se lograron en dicho proceso (los llamados “42 puntos de consenso”), el ataque por parte del MNLF a la ciudad de Zamboanga

en septiembre de 2013; la orden de búsqueda y captura contra el fundador del MNLF, Nur Misuari; las críticas del MNLF al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y el MILF en marzo de 2014; y las interpretaciones distintas entre el Gobierno y el MNLF sobre la conclusión o no del proceso de revisión del acuerdo provocaron una parálisis de las negociaciones de paz desde finales del 2013. La llegada al poder de Rodrigo Duterte a mediados de 2016 comportó la reanudación de las conversaciones con Nur Misuari, a quien se concedió un permiso judicial temporal para tal efecto. Sin embargo, la facción mayoritaria del MNLF apostó por incluir las principales demandas del MNLF en el proceso de paz con el MILF, de modo que tres de sus representantes fueron incluidos en la Comisión de Transición de Bangsamoro, encargada de redactar la Ley Fundamental de Bangsamoro (una nueva entidad política contemplada en el acuerdo de paz de 2014 con el MILF y que debería sustituir a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán).

Durante el año **el Gobierno entabló negociaciones con las dos principales facciones del MNLF, principalmente en relación a la implementación de los compromisos pendientes del Acuerdo de Paz de 1996, la participación del MNLF en las estructuras de gobierno de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán o la reintegración de combatientes del MNLF.** En cuanto a la facción liderada por el fundador del grupo, Nur Misuari, en septiembre la Oficina del Consejero Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad (OPRARU, por sus siglas en inglés) se reunió con el vicepresidente del grupo, Abdulkarim Tan Misuari, hijo de Nur Misuari, y acordaron reconvertir el principal espacio de interlocución existente hasta el momento —Comité de Coordinación de Paz— en un Comité de Implementación de la Paz. Según el acuerdo, cada panel tendrá siete miembros, del que dependerán subcomités que lidiarán con cuestiones socioeconómicas, de justicia transicional, seguridad y medidas de fomento de la confianza. El Consejero Presidencial para la Paz, Carlito Galvez, dijo que el Gobierno de Marcos hará todo lo posible para honrar y cumplir con los compromisos pendientes del acuerdo de 1996 con el MNLF, identificados durante un Proceso de Revisión Tripartita entre el Gobierno, el MNLF y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI, que también ejerció las tareas de facilitación de las negociaciones que condujeron al acuerdo) que culminó en 2016. Cabe recordar que históricamente, el MNLF y Nur Misuari en particular habían recriminado al Estado no haber completado la implementación del acuerdo de 1996, y que ello había provocado numerosos desencuentros políticos y algunos episodios de violencia importantes que incluso motivaron la detención de Nur Misuari en varias ocasiones. Ante tal situación, en 2006 la OCI solicitó el inicio del mencionado Proceso de Revisión Tripartita para evaluar la implementación del acuerdo de 1996 y resolver las disputas entre el Gobierno y el MNLF. Durante el proceso, que comenzó en noviembre de 2007 y finalizó de enero de 2016, el MNLF planteó 43 cuestiones de la Ley 9054 —que reorganizaba la Región Autónoma del Mindanao Musulmán a partir de las disposiciones del acuerdo de 1996— que, en su

opinión, eran incompatibles con el acuerdo de 1996. Salvo una cuestión sobre minerales estratégicos, el resto de los 42 temas restantes lograron consenso. Buena parte de las llamadas “42 cuestiones de consenso” se incluyeron en la Ley Fundamental de Bangsamoro —la ley que, entre otros elementos, creaba la RABMM—, pero hubo dos aspectos que el MNLF considera que no fueron resueltos adecuadamente: el Fondo Bangsamoro de Asistencia al Desarrollo y el Comité Tripartito de Supervisión de la Implementación.

Al día siguiente del acuerdo con la facción del MNLF liderada por Misuari, la OPRARU se reunió con la facción mayoritaria del MNLF —la liderada por el ex alcalde Cotobato y Ministro de Trabajo y Empleo de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), Muslimin Sema— y se acordó que **la OPRARU facilitaría las conversaciones para lograr una mayor convergencia entre las distintas facciones del MNLF.** En este sentido, se acordó la creación de un Comité Ejecutivo Conjunto del MNLF que dará directrices que orienten el mencionado proceso de convergencia. En la misma línea, **la OPRARU se comprometió a hacer todo lo posible para que la OCI vuelva a involucrarse en el proceso de implementación de los compromisos pendientes del acuerdo de paz de 1996.** Finalmente, el MNLF y el Gobierno filipino acordaron la transformación del actual mecanismo de interlocución entre las partes en un Comité de Coordinación e Implementación Gobierno-MNLF. Con motivo de este acuerdo, el Consejero Presidencial para la Paz, Carlito Galvez, declaró que la implementación de los acuerdos de paz de Bangsamoro es solamente uno de los cinco puntos de la Agenda de Paz, Reconciliación y Unidad del Gobierno de Marcos, y señaló que una de las prioridades de dicha administración será la mayor unidad entre las distintas facciones del MNLF, así como una mayor convergencia entre los acuerdos de paz firmados con el MNLF (1996) y el MILF (2014), poniendo como ejemplo la integración de representantes de ambas organizaciones en el Parlamento de la RABMM.

A pesar de sus diferencias, las dos facciones principales del MNLF estuvieron de acuerdo en valorar positivamente dos decisiones del Gobierno de Marcos. En primer lugar, la concesión de una amnistía, el 22 de noviembre, a los antiguos combatientes del MNLF que hubieran cometido delitos recogidos en el código penal del país como consecuencia de sus convicciones políticas. Desde la aprobación de tal medida hay dos años para presentar las solicitudes y documentación correspondiente a la Comisión Nacional de la Amnistía. En segundo lugar, **el lanzamiento el 30 de septiembre del Programa de Transformación del MNLF,** un compromiso recogido en el acuerdo de 1996. El programa, que se inició en Basilan, tiene cuatro grandes componentes: seguridad, esfera socio-económica, justicia transicional y medidas de fomento de la confianza. Unos 60 ex combatientes del MNLF habían superado el proceso de selección de casos, y otros 407 antiguos combatientes hicieron lo propio a principios de octubre.

Filipinas (NDF)	
Actores negociadores	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)
Terceras partes	Noruega
Acuerdos relevantes	Declaración conjunta de La Haya (1992), Acuerdo conjunto sobre seguridad y garantías de inmunidad (1995), Acuerdo sobre el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (1998)

Síntesis:

Las negociaciones entre el Gobierno y el NDF se iniciaron en 1986, tras la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos. Desde entonces se han producido numerosas rondas de negociaciones, pero solamente se ha llegado a un acuerdo en uno de los cuatro aspectos sustantivos de la agenda negociadora identificados en la Declaración de La Haya de 1992: derechos humanos y derecho internacional humanitario (se firmó un acuerdo en 1998); reformas socioeconómicas; reformas políticas y constitucionales; y fin de las hostilidades y disposición de fuerzas. Desde el año 2004, el Gobierno de Noruega ejerce tareas de facilitador entre el Gobierno y el NDF, organización política que representa al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado (el NPA) en las negociaciones de paz. Además de las diferencias sustantivas entre el Gobierno y el NDF acerca del modelo socioeconómico y político que más conviene a Filipinas, uno de los aspectos que en los últimos años ha generado mayor controversia entre las partes es el de las garantías de seguridad e inmunidad para los miembros del NDF que participan en las negociaciones de paz.

Después de un paréntesis de seis años, en noviembre el Gobierno y el NDF firmaron en Oslo un comunicado conjunto en el que se comprometían a reanudar las negociaciones para intentar poner fin de manera dialogada y pacífica a un conflicto armado que se inició a finales de los años sesenta, uno de los más longevos de Asia. El comunicado conjunto se firmó el 23 de noviembre y se dio a conocer el 28 de noviembre. Entre ambas fechas, **el Gobierno anunció cuatro proclamaciones presidenciales que otorgaban la amnistía a los miembros de cuatro organizaciones revolucionarias**, incluyendo al NDF, el NPA y el Partido Comunista de Filipinas, además del MILF, el MNLF, y el Rebolusyonaryong Partido Manggagawa ng Pilipinas/ Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB). La amnistía cubre los delitos punibles de acuerdo al Código Penal y a las llamadas leyes penales especiales en persecución de sus convicciones políticas. El mismo día, también se hizo pública una orden ejecutiva que amplía las funciones de la Comisión Nacional para la Amnistía, el organismo encargado de decidir qué casos se acogen a la casuística de las leyes de amnistía. En su segundo discurso sobre el estado de la nación en julio de 2023, el presidente Marcos ya había asumido el compromiso de conceder la amnistía a aquellos combatientes que se rindieran o entregaran.

En la declaración conjunta firmada por el Gobierno y el NDF, ambas partes se comprometen a buscar una solución al conflicto armado pacífica y basada en principios, que

reconocen tiene unas profundas raíces de naturaleza política y socioeconómica. Entre otras cuestiones, la declaración también señala la necesidad de unirse como nación para enfrentar urgentemente problemas sociales y económicos y amenazas externas a la seguridad, en una alusión que algunos análisis atribuyen al contencioso que Filipinas y China mantienen en el Mar de la China Meridional. Ambas partes reconocieron que aún se están discutiendo el marco, los tiempos, la agenda y las prioridades de la negociación y que están pendientes de formarse tanto los paneles negociadores como los equipos de trabajo de carácter más técnico. En una rueda de prensa, el Gobierno declaró que en realidad no se trata de una reanudación de las conversaciones de paz, sino del inicio de un nuevo proceso de negociación, y que la mencionada declaración no tiene efectos inmediatos. Manila no quiso concretar plazos, aunque avanzó que el inicio de las conversaciones formales seguramente se produciría en el primer trimestre de 2024. Además, el Gobierno declaró que proseguirán las operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra el NPA. En este sentido, a finales de año las Fuerzas Armadas declararon que el NPA contaba con 20 frentes, algunos de ellos muy debilitados. Las principales instancias del Estado que guardan alguna relación con la gestión del conflicto (Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Oficina del Consejero Presidencial sobre Paz, Reconciliación y Unidad, Grupo Nacional de Trabajo para la Terminación del Conflicto Armado Comunista Local, Comisión Nacional de Seguridad, NTC-ELCAC por sus siglas en inglés) se mostraron favorables, con matices y reservas, tanto a la concesión de amnistía como a la reanudación de las negociaciones de paz. Sin embargo, **la vicepresidenta del país, Sara Duterte, expresó su tajante oposición a la declaración conjunta con el NDF**, que calificó de “acuerdo con el diablo”, por considerar que el NDF jamás ha sido sincero en los distintos procesos de negociación que ha habido en las últimas décadas y señalando que se puede negociar por la paz y la reconciliación y lograr un desarrollo significativo del país sin tener que capitular ante los enemigos del Estado. Asimismo, Duterte se opuso a la concesión de amnistía a grupos a los que tildó de terroristas alegando la falta de justicia a las víctimas y a sus familiares. Además de ser la vicepresidenta, tener altas cotas de popularidad entre la población y de ser la hija del ex presidente Rodrigo Duterte, algunos análisis calificaron como relevante la oposición de Duterte al proceso de negociación por ser también la co-vicepresidenta del NTF-ELCAC, un organismo inter-agencias que durante el mandato de Rodrigo Duterte fue el principal responsable de la política de contrainsurgencia, siendo acusado en numerosas ocasiones de etiquetar a personas críticas con el Gobierno como insurgentes o miembros del movimiento revolucionario.

Por su parte, el NDF valoró positivamente la reanudación del diálogo y recordó que **este escenario se fraguó durante una serie de encuentros informales y confidenciales facilitados por el Gobierno de Noruega desde el año 2022, principalmente en Noruega y Países**

Bajos, que es donde reside desde hace décadas el panel negociador del NDF. Según algunos medios, una de las reuniones que inició el proceso de recuperación de la confianza entre ambas partes fue un encuentro entre el fundador del Partido Comunista de Filipinas y el NPA, Jose Maria Sison, que falleció en diciembre de 2022, y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Emmanuel Bautista. La jefa interina del panel negociador del NDF, Juliet de Lima –viuda de Sison–, destacó la importancia de abordar uno de los principales problemas del país y uno de los factores que originó el conflicto armado: la alta concentración de la propiedad de la tierra y la falta de tierra para la población campesina. En respuesta a la idea del Gobierno de iniciar un nuevo proceso de diálogo, de Lima advirtió que **el marco negociador que acuerden ambas partes debe construirse sobre la base de los acuerdos que se han firmado en las últimas décadas**, principalmente la declaración de La Haya (1992, que define el marco, los principios y la agenda de la negociación) y los acuerdos sobre garantías de seguridad e inmunidad para los negociadores del NDF (1997) y el acuerdo sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario (1998). Además, el NDF también remarcó la importancia de resolver algunas cuestiones antes del inicio de las negociaciones formales: la liberación general e incondicional de los todos los presos políticos del país; la liberación de los llamados consultores políticos del NDF para que puedan participar en las negociaciones de paz; las garantías de seguridad para el equipo negociador del NDF; y la retirada de la calificación de terroristas al NDF y a algunos de sus destacados líderes o miembros del panel negociador. Aunque Juliet de Lima dijo que estas demandas no eran precondiciones para el diálogo, el Consejero Presidencial para la Paz, Carlito Gálvez, advirtió que los procesos de negociación anteriores dejaban claro que las condiciones para el diálogo antes incluso de que se hubieran iniciado las conversaciones formales suponían una amenaza para la construcción de confianza y tenían la capacidad de hacer descarrilar las conversaciones. El NDF también declaró a finales de año que tenía pendiente discutir la composición de su panel negociador y decidir si decreta o no un alto el fuego o cese de hostilidades con motivo de la reanudación del diálogo.

A finales de año, el Gobierno expresó su malestar y decepción por el comunicado que lanzó el Partido Comunista de Filipinas con motivo del 55º aniversario de la fundación del Partido, en el que declaraban la primacía de la lucha armada para lograr transformaciones y en el que señalaban que las conversaciones de paz eran un campo de batalla adicional para el avance de sus objetivos. Además, el comunicado también ordenó a al NPA a fortalecerse e incrementar su lucha contra el Estado filipino y contra el imperialismo de EEUU y el Gobierno de Marcos. Sin embargo, el aspecto del comunicado que generó mayor controversia fue el anuncio por parte del Partido Comunista del llamado Tercer Movimiento de Rectificación sobre la base del marxismo-leninismo-maoísmo y los principios básicos

del Partido enunciados Sison, con el objetivo de superar los errores, debilidades y deficiencias en el campo ideológico, político y organizativo que el partido había identificado en los últimos años (especialmente desde 2016), y que habrían dificultado el crecimiento del partido y el avance de la revolución. El Primer Movimiento de Rectificación se llevó a cabo en la segunda mitad de los años sesenta –y culminó con la refundación del partido comunista en 1968–, mientras que el Segundo Movimiento de Rectificación se llevó a cabo a principios de los años 90.

Género, paz y seguridad

La actual presidenta interina del panel negociador del NDF es Juliet de Lima, mientras que Coni Ledesma también forma parte del mismo. Por otra parte, Kristina Lie Revheim es la enviada especial al proceso de paz del Gobierno de Noruega, que ejerce las tareas de facilitación del diálogo desde hace años.

Myanmar	
Actores negociadores	Gobierno; grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF, NMSP y LDU; grupos armados no adheridos al NCA: UWSP, NDAA, SSPP/SSA-N, KNPP, NSCN-K, KIA, AA, TNLA, MNDA
Terceras partes	China, ASEAN
Acuerdos relevantes	Acuerdo de alto el fuego nacional (octubre de 2015)

Síntesis:

Desde que en 1948 se iniciara el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y los grupos insurgentes de adscripción étnica se han producido varios procesos de negociación que han perseguido el fin de la violencia armada. Desde finales de la década de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, numerosos grupos armados alcanzaron acuerdos de alto el fuego con el Gobierno birmano. Si bien nunca se alcanzaron acuerdos de paz definitivos, la violencia se redujo notablemente como consecuencia de estos pactos. En el año 2011, después del cambio de Ejecutivo como consecuencia de las elecciones de 2010, el nuevo Gobierno inició una serie de acercamientos a la insurgencia armada que desembocaron en el inicio de negociaciones de paz y la firma de acuerdos con la mayoría de los grupos armados que operan en diferentes zonas del país. A mediados de 2012 el Gobierno había firmado acuerdos de alto el fuego bilaterales con 12 organizaciones insurgentes. En 2013 se inició un proceso de diálogo con diferentes grupos armados con el objetivo de lograr un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y de impulsar conversaciones de carácter político. En 2015 el Gobierno y ocho grupos armados de oposición firmaron un acuerdo de alto el fuego (NCA, por sus siglas en inglés) y se iniciaron los primeros pasos para el diálogo político. En 2016, la consejera de Estado del Gobierno, Aung San Suu Kyi, convocó la Conferencia Panglong 21 que reunió al Gobierno con los grupos armados de oposición, dando inicio a una nueva fase del proceso de paz. La Conferencia fue convocada en varias ocasiones en los años posteriores.

Durante el año se produjeron diferentes espacios de diálogo con varias de las insurgencias activas en el país y prosiguieron los infructuosos intentos diplomáticos de ASEAN de diálogo con el régimen militar birmano. En diciembre, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado MNDAA, integrante de Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA (grupo armado kokang), el TNLA (grupo armado ta'ang) y el AA (grupo armado rakáin). El alto el fuego, facilitado por China, tuvo lugar después de una escalada del conflicto armado sin precedentes en el norte del estado Shan, que había situado al régimen militar de Myanmar en su posición más frágil desde el golpe de estado de 2021. La escalada de la violencia se había producido tras el inicio de la operación 1027 (en referencia a la fecha de inicio el 10 de octubre), tras la cual los grupos armados tomaron importantes posiciones infligiendo graves derrotas militares al régimen e impulsando acciones militares por parte de otras insurgencias en otras zonas del país. El 11 de diciembre el MNDAA y el Gobierno acordaron un alto el fuego temporal en un encuentro en China, que contemplaba el establecimiento de un corredor seguro para la población civil y funcionarios del Gobierno. No obstante, los enfrentamientos persistieron y escalaron derivando en una ruptura de las conversaciones entre las partes el 23 de diciembre. Las conversaciones habían tenido lugar en la ciudad china de Kunming y se produjeron después de la visita a Beijing del ministro de Exteriores de Myanmar.

Por otra parte, continuaron los contactos entre el gobierno de Myanmar y otras insurgencias armadas étnicas con la facilitación de China en varias ocasiones. Se produjeron algunas reuniones con grupos firmantes del acuerdo de alto el fuego de 2015, si bien se trató de aquellos grupos con menor capacidad operativa y no se alcanzaron acuerdos significativos con esas organizaciones. En el marco del octavo aniversario de la firma del acuerdo de alto el fuego de alcance nacional, se llevó a cabo una ceremonia que contó con la presencia de representantes de algunos de los grupos firmantes. Finalmente, en lo que respecta a los contactos entre ASEAN y el Gobierno birmano tras la crisis política generada por el golpe de Estado militar de 2021, no se produjeron avances y, de hecho, se hicieron evidentes algunas diferencias entre los miembros de ASEAN sobre cómo conducir la relación con Myanmar. Si bien los integrantes de la organización asiática reafirmaron su compromiso con el Consenso de Cinco Puntos que se estableció tras el golpe de Estado, los Gobiernos tuvieron diferentes posiciones. Tailandia se mostró favorable a un mayor acercamiento a la junta militar birmana, posición que fue criticada por romper el consenso entre los países asiáticos que conforman la organización. De hecho, el ministro de Exteriores de Tailandia visitó a la antigua mandataria Aung San Suu Kyi en la cárcel. En septiembre, los países de ASEAN acordaron un nuevo mecanismo para abordar la situación de Myanmar, mediante una troika conformada por la actual, la

anterior y la futura presidencia de la organización. Asimismo se decidió que Myanmar no podrá ostentar la presidencia regional en 2026 y se repitieron los llamamientos al cese de la violencia en el país y a encontrar una solución duradera y sostenible para su situación. Además, se pidió el cese de los ataques contra civiles, casas e infraestructuras civiles, como centros educativos, sanitarios y religiosos. En noviembre, el Gobierno de Indonesia, que ostentaba la presidencia de ASEAN en ese momento, señaló que había llevado a cabo reuniones con diferentes actores relevantes de Myanmar con el objetivo de impulsar el consenso de cinco puntos, incluyendo representantes del Gobierno de Unidad Nacional (NUG por sus siglas en inglés, gobierno en el exilio formado tras el golpe de Estado) y de las fuerzas de resistencia étnicas. El gobierno de Myanmar estuvo representado por “interlocutores”, tal y como se recogió en el comunicado posterior, sin que se especificara su identidad. De hecho, el NUG señaló que no se sentaba en conversaciones con el Gobierno militar.

Tailandia (sur)	
Actores negociadores	Gobierno, BRN
Terceras partes	Malasia
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:
 Desde el año 2004, fecha en la que se reinicia el conflicto armado en el sur de Tailandia, se han producido varias conversaciones informales, exploratorias y discretas entre el Gobierno tailandés y el movimiento insurgente. Algunas de estas iniciativas de diálogo han sido lideradas por organizaciones no gubernamentales, por el Gobierno de Indonesia o por antiguos altos cargos del Estado tailandés. Tras aproximadamente un año de contactos exploratorios entre la entonces primera ministra, Yingluck Shinawatra, y algunos movimientos insurgentes, a principios de 2013 se iniciaron conversaciones públicas y formales entre el Gobierno y el grupo armado BRN, con la facilitación del Gobierno de Malasia. Tales negociaciones fueron interrumpidas por el golpe de Estado de marzo de 2014, pero la Junta Militar que gobierna desde entonces el país reanudó los contactos exploratorios con varios grupos insurgentes en la segunda mitad del año. En 2015 se hicieron públicas las negociaciones entre el Gobierno y MARA Patani –una organización que agrupa a los principales grupos insurgentes del sur del país–. A pesar de que la insurgencia quisiera abordar las medidas que pudieran resolver los temas nucleares del conflicto (como el reconocimiento de la identidad distintiva del pueblo patani o la concesión de algún grado de autogobierno para las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat), el principal punto de discusión en las fases iniciales del proceso era la conformación de varias zonas de seguridad en las que se pudieran reducir los niveles de violencia y, por tanto, constatar el grado de representatividad de MARA Patani y el compromiso de los grupos insurgentes (especialmente del BRN) hacia el proceso de diálogo.

A pesar de que siguieron registrándose elevados niveles de violencia en el sur del país y de que las negociaciones de paz entre el Gobierno y el BRN permanecieron

inactivas durante buena parte del año, **hubo importantes avances en el proceso de negociación entre ambas partes, como la designación de un nuevo facilitador por parte de Malasia, el nombramiento de un nuevo panel negociador por parte del nuevo Gobierno de Tailandia, la firma de una hoja de ruta compartida entre ambas partes, o la aceptación por parte del BRN de que otros grupos armados participen en el proceso de negociación.** El 10 de enero, el Gobierno de Malasia anunció la designación del general Zulfiki Zainal Abidin –antiguo jefe de las Fuerzas Armadas en Malasia– en sustitución de Abdul Rahim Noor, con efectos desde el 1 de enero. A principios de febrero, Zulfiki Zainal Abidin se reunió en Bangkok con el panel negociador gubernamental liderado por el general Wanlop Rugsanaoh, y pocos días después, el 20 de febrero, se inició en Malasia la sexta ronda de negociación del llamado Proceso de Diálogo de Paz en el Sur de Tailandia. En dicha reunión, que duró dos días, **ambas partes acordaron el Plan Global Conjunto hacia la Paz, una suerte de hoja de ruta compartida que deberá ser implementada en 2023 y 2024.** En una rueda de prensa conjunta con ambos paneles negociadores, Zulfiki Zainal Abidin anunció que entre los meses de marzo y mayo se seguirían trabajando los detalles de dicho acuerdo en el seno de varias reuniones técnicas entre las partes. Además, el facilitador del proceso de negociación también reveló que **el BRN habría aceptado la participación en las conversaciones de paz de otros grupos armados que operan en el sur del país,** aunque sin ofrecer nombres ni fechas al respecto. Cabe destacar que pocos días antes de la celebración de la sexta ronda de negociación, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, había visitado Tailandia y había declarado que haría todo lo posible y todo lo que estuviera a su alcance para lograr una solución al conflicto armado, y también que Malasia no aceptaría el uso de la violencia para resolver el conflicto, en una declaración que algunos medios interpretaron como una advertencia tanto al Gobierno de Tailandia como al BRN. A pesar de que muchos analistas consideraron que el llamado Plan Global Conjunto hacia la Paz podría significar un punto de inflexión importante en el proceso, en los meses posteriores a la firma del mismo no se produjeron (o no se hicieron públicas) reuniones ni hubo avances sustanciales en la negociación. De hecho, en marzo el BRN comunicó públicamente que suspendía temporalmente su participación en las negociaciones hasta que entrara en funciones un nuevo Gobierno surgido de las elecciones en el mes de mayo.

El líder del partido vencedor en dichos comicios (Move Forward) había declarado que si conseguía formar gobierno, el proceso de negociación estaría liderado por civiles (los últimos tres jefes del panel gubernamental han sido militares), que tendría más en consideración los derechos humanos en la región, que impulsaría un proceso de paz más inclusivo y participativo y que priorizaría el principio de coexistencia en una sociedad multicultural. Sin embargo, aunque dicha formación consiguió el apoyo de ocho partidos para lograr una

mayoría parlamentaria, el número de escaños de tales formaciones no alcanzaron la mayoría suficiente para formar gobierno. Finalmente, después de un *impasse* de más de tres meses, el líder del partido opositor Pheu Thai (segundo en los comicios de mayo), fue investido primer ministro después de lograr forjar una coalición de 11 partidos. Cabe señalar que el mismo día que Srettha Thavisin fue investido primer ministro, regresó a Tailandia el ex primer ministro y fundador y líder de facto de Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, tras permanecer 15 años en el exilio para evadir varios cargos pendientes con la justicia. Thaksin fue depuesto en golpe de estado en 2006, y fue precisamente bajo su administración cuando el conflicto en las provincias sureñas de mayoría musulmana escaló hasta niveles sin precedentes en las décadas anteriores. Algunas organizaciones de la sociedad civil en el sur de Tailandia lamentaron la aparente falta de interés de Srettha y de su gobierno en impulsar las negociaciones de paz, criticando el temor de las nuevas autoridades en Bangkok a que se internacionalice la resolución del conflicto. Finalmente, **tras algunos meses de incertidumbre por el futuro de las negociaciones de paz, a finales de noviembre el Gobierno designó a Chatchai Bangchud como jefe del nuevo panel negociador del gobierno,** que también estará conformado por el comandante del ejército para la región sur, el director general de asuntos civiles del Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia. Chatchai, que es el primer civil en desempeñar el cargo, ocupaba el cargo de vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional y ha estado involucrado en el proceso de negociación desde antes de que Malasia asumiera las tareas de facilitación del diálogo en 2013, siendo en los últimos tiempos el principal colaborador del hasta entonces negociador principal del Gobierno, el general Wanlop Rugsanaoh. En diciembre, Chatchai Bangchud viajó a Malasia para reunirse con el equipo facilitador del diálogo. Según informaron varios medios, algunas de las prioridades del nuevo panel serán la reducción de la violencia (y en especial el fin de las hostilidades durante el mes de Ramadán, una iniciativa que ya se llevó a cabo en 2022) y la mayor inclusividad y participación en el proceso. Según algunas voces, en enero de 2024 un comité de trabajo del panel negociador iniciará consultas con varios actores del sur del país. También en diciembre, el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, se reunió en una ciudad tailandesa cerca de la frontera con el primer ministro tailandés y declaró que este tenía la voluntad política de resolver el conflicto en el sur de Tailandia.

Género, paz y seguridad

A finales de mayo, como parte de un proyecto financiado por Peacemakers Network's Asia Working Group, 25 mujeres musulmanas y budistas se reunieron en Pattani para participar en un taller sobre diálogo inclusivo y para analizar los retos y dificultades del proceso de paz entre el Gobierno tailandés y el BRN.

4.2.2 El Pacífico

Papúa Nueva Guinea (Bougainville)			
Actores negociadores	Gobierno de Bougainville	Gobierno Autónomo de	
Terceras partes	ONU		
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Paz de Bougainville (2001)		

Síntesis:

El conflicto armado entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Ejército Revolucionario de Bougainville (1988-1998), que algunas fuentes consideran ha sido el más mortífero en Oceanía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, finalizó con un cese de hostilidades en 1998 y con la firma de un acuerdo de paz en 2001 en Arawa (mayor ciudad de Bougainville). Dicho acuerdo, entre otras cuestiones, preveía el establecimiento de la Región Autónoma de Bougainville (RAB), el desarme y la desmovilización de combatientes, y la celebración de un referéndum de independencia no vinculante en un período máximo de 15 años posteriormente a la elección del primer Gobierno de la RAB, que finalmente tuvo lugar en 2005. Tras varios años de negociaciones entre los Gobiernos nacional y autonómico, en 2018 el Organismo Conjunto de Supervisión del Acuerdo creó el Grupo de Trabajo de Planificación del Post-referéndum y el ex presidente irlandés Bertie Ahern fue elegido presidente de Comisión sobre el Referéndum de Bougainville, encargada de elaborar el censo y demás preparativos logísticos de la consulta. Tras haberse retrasado en varias ocasiones, finalmente el referéndum se celebró entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, con una pregunta binaria en la que se podía elegir entre mayor autonomía o independencia para la región.

Durante el 2023 no solamente no se registraron acuerdos y avances significativos en las conversaciones entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno Autónomo de Bougainville sobre el estatus político de Bougainville, sino que en varios momentos del año se produjeron importantes desencuentros entre ambas partes acerca de cuestiones procedimentales y de fondo del proceso. Uno de los principales conflictos entre las partes se registró en el mes de junio, después de que el ministro para Asuntos de Bougainville, Manasseh Makiba, declarara ante el Parlamento nacional que la votación sobre la independencia de Bougainville requeriría de una mayoría de dos tercios (y no simple), por entender que una cuestión de tal relevancia y que afecta a la soberanía del país implicaría una modificación de la Constitución. Makiba también recordó que tanto la Constitución como el Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001 prevén que sea el Parlamento nacional quien tome la decisión sobre cómo interpretar el resultado del referéndum de independencia de Bougainville de 2019 (un 97,7% votó a favor de la independencia) y, en última instancia, sobre el estatus político de Bougainville. En este sentido, Makiba señaló que si determinados líderes no estaban de acuerdo con el proceso de ratificación propuesto al Parlamento nacional, podían elevar la cuestión ante la Corte Suprema para que ésta ofreciera su veredicto al respecto. El Gobierno Autónomo de Bougainville, y en particular su ministro sobre la Misión de Implementación de la Independencia, Ezekiel Massat, protestaron

airadamente por considerar que el Gobierno estaba intentado cambiar unilateralmente una cuestión (la de la mayoría necesaria en el Parlamento) que ya había sido acordada previamente por ambos gobiernos. En este sentido, Massat declaró que **el Gobierno nacional estaba poniendo tantos obstáculos como le era posible en el camino de Bougainville hacia su independencia y advirtió que el Gobierno Autónomo de Bougainville ya no tenía ninguna confianza en poder alcanzar la independencia bajo el Gobierno de James Marape.**

Ante tal crisis, a finales de julio se celebró en Port Moresby una reunión (la única en todo el año) de la Autoridad Conjunta de Supervisión, liderada por el primer ministro James Marape y por el presidente del Gobierno Autónomo de Bougainville, Ishmael Toroama, en la que se adoptaron algunos acuerdos importantes, como el hecho de que la moción que se someta al Parlamento sea aprobada por mayoría simple (y no cualificada, como había sugerido Massat), la invitación a Toroama y otros miembros del Gobierno de Bougainville a que puedan llevar a cabo tareas de sensibilización e incidencia política ante miembros del Parlamento nacional, o la posibilidad de designar a una tercera parte que facilite el proceso de diálogo entre ambos gobiernos y que ayude a resolver los contenciosos que puedan surgir en el mismo.

A pesar de la importancia de tal reunión, durante la segunda mitad del año prosiguieron las protestas por parte del Gobierno Autónomo de Bougainville. En el mes de septiembre, por ejemplo, el Gobierno Autónomo de Bougainville expresó su firme oposición a que la votación en el Parlamento nacional sobre la independencia de Bougainville sea secreta, o bien a que tal decisión se tome en dos o más sesiones parlamentarias, por considerar que tal formato podría retrasar los tiempos acordados por ambas partes. En abril de 2022, los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Bougainville habían logrado un acuerdo (llamado Pacto de Era Kone sobre la Finalización del Referéndum de Bougainville) según el cual los resultados del referéndum del 2019 y las conclusiones y acuerdos de las consultas y negociaciones que han mantenido desde entonces las dos partes deberían ser presentados ante el Parlamento de Papúa Nueva Guinea antes de finales de 2023. Tal compromiso fue ratificado por el Gobierno nacional en varias ocasiones durante el 2023, pero al finalizar el mes de diciembre tal compromiso no se había materializado. En el mes de diciembre, la tensión entre ambos gobiernos volvió a incrementarse después de que el ministro para Asuntos de Bougainville, Manasseh Makiba, dijera que los resultados del referéndum de 2019 no eran vinculantes, que el Parlamento de Papúa Nueva Guinea era la única autoridad con capacidad para decidir acerca del estatus político de Bougainville y que el referéndum de independencia de 2019 era muy singular, en el sentido de que su realización estaba contenida en un acuerdo de paz –del año 2001– y no estaba relacionada con un proceso de descolonización,

desvinculándolo por completo de otros casos cercanos geográficamente, como Nueva Caledonia o Papúa Occidental. **El Gobierno Autónomo de Bougainville señaló que en ningún lugar del acuerdo de paz de 2001 o del ordenamiento jurídico de Papúa Nueva Guinea se estipula que el referéndum no sea vinculante** y lamentó que, al finalizar el año, todavía no hubiera habido respuesta a una carta de Toroama a Marape en la que solicitaba la designación de un mediador independiente que pudiera facilitar las conversaciones y la resolución de contenciosos entre ambos gobiernos.

Género, paz y seguridad

Francesca Riana Semoso se convirtió en la tercera mujer en ganar un escaño en el Parlamento de Papúa Nueva Guinea (y la primera originaria de Bougainville) al obtener un escaño por Bougainville Norte en las elecciones legislativas parciales celebradas a finales de octubre. Semoso ya había ocupado un escaño en el Parlamento de Bougainville en dos ocasiones previas.

